

FOJA: 1 .- .-

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 29° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-5426-2017
CARATULADO	: RENTAS INMOBILIARIAS / PAMPA
CAMARONES	

Santiago, veintisiete de Marzo de dos mil diecinueve

VISTOS:

Manuel Ulises Lobos Rosas, abogado, en representación de Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada, representada por Mario Vega Santis, ingeniero, todos domiciliados en Avda. San Pablo N° 1503, departamento 912, Santiago, interpone acción de cumplimiento forzado de contrato con indemnización de perjuicios, en contra de Pampa Camarones SpA, representada por Cristián Iván Alfaro Faúndez, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en Avda. Presidente Riesco N° 5335, oficina 2104, Las Condes.

Señala que con fecha 30 de mayo de 2016, Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada y Andacollo Soluciones Mineras S.A, suscribieron contratos de promesa de compraventa con Pampa Camarones SpA, las primeras –Chiloé y Andacollo- como promitentes vendedoras y esta última –Pampa Camarones- como promitente compradora. El objeto de las promesas mencionadas consistió en una serie de maquinarias y camiones, singularizados en los anexos de las respectivas escrituras, cuyo detalle se explica a continuación: A.- Promesa suscrita con Andacollo Soluciones Mineras S.A: i) camión marca IVECO, modelo Trakker AD410T42H, serie WJMJ4CSS6CC245227, N° motor 180516, año 2012, color rojo, PPU DTPY-36-1; ii) excavadora Komatsu, Modelo PC 450 LC-8, número de serie 70847, número de motor 571237, inscripción DPZV57-6, Año 2012; iii) excavadora Komatsu, modelo PC 450 LC-8, número de serie 70839, número de motor 57210, inscripción DPZV81-9, año 2012. B.- Promesa suscrita con Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada: i) camión marca IVECO, modelo Trakker AD410T42H, N° serie WJMJ4CSS6CC244838, N° motor 179741, año 2012, color rojo, PPU DRSG-59-9; ii) camión marca IVECO, modelo Trakker AD410T42H, N° serie WJMJ4CSS6CC244676, N° motor 175354, año 2012, color rojo, PPU DRSG-



Foja: 1

47-5; iii) camión marca IVECO, modelo Trakker AD410T42H, N° serie WJMJ4CSS6CC244679, N° motor 179340, año 2012, color rojo, PPU DRSG-50-5.

Indica que la entrega a la promitente compradora de los bienes antes singularizados se produjo en la misma fecha de suscripción de los respectivos contratos, según consta en la cláusula quinta de tales pactos. Agrega que en ambas promesas se estableció para celebrar la compraventa definitiva un plazo de 30 días corridos, siguientes a la fecha de aprobación del “Acuerdo de Reorganización Judicial” que la promitente compradora propondría a sus acreedores, conforme al procedimiento establecido en la Ley N° 20.720. Asimismo, que se estipuló como fecha máxima de suscripción de la compraventa definitiva el 30 de septiembre de 2016.

Hace presente que el acuerdo de reorganización referido se encuentra aprobado y ejecutoriado y que el plazo para la celebración de las respectivas compraventas se encuentra largamente cumplido, sin que a la fecha hayan sido suscritas.

Agrega que a la fecha de la firma de los contratos de promesa de compraventa, Pampa Camarones había solicitado el inicio de un procedimiento concursal de reorganización judicial ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, en los autos Rol C-8480-2016. Asimismo, que el acuerdo propuesto contiene una serie de estipulaciones que se sustentan en la continuidad del contrato con ENAMI, y por ende, de determinadas operaciones mineras. Con tal propósito, el referido acuerdo contempla expresamente la suma de \$520.000.000 para la adquisición de maquinarias, que sería exactamente la suma de los precios convenidos en las promesas de compraventa, circunstancia que no haría sino corroborar que, desde su génesis, el proceso de reorganización de la promitente compradora supuso la adquisición de las maquinarias que son objeto de las promesas. Subraya que el hecho que se encuentren contempladas las compraventas de maquinarias en el texto del acuerdo de reorganización, implica que el incumplimiento de esta obligación contractual por parte de Pampa Camarones daría lugar a una vulneración de los términos de aquél. En ese sentido, estima clarificador el primer informe evacuado por el Veedor Enrique Ortiz, en el cual reconoce la existencia de las promesas, así como de la suma de 520 millones de pesos para cumplir con las mismas, aunque erróneamente indique que habrían sido suscritas con la sociedad Allpa Operaciones Mineras S.A, y mencione una promesa, en lugar de dos.

Sostiene que las promitentes vendedoras, de buena fe, aceptaron condicionar la suscripción del contrato definitivo y, por consiguiente, el pago del



Foja: 1

precio a la aprobación del acuerdo de reorganización de la promitente compradora, no obstante haber hecho entrega de las maquinarias materia de la operación. Al respecto, precisa que la aprobación del acuerdo se produjo en la junta de acreedores realizada el día 8 de agosto de 2016, que se encuentra ejecutoriado, según constaría en publicación efectuada en el boletín concursal el 1 de septiembre del mismo año. Sin embargo, reprocha a Pampa Camarones no haber dado aviso alguno a las promitentes vendedoras acerca del cumplimiento de la condición indicada, ya que el acuerdo fue aprobado y hasta ejecutoriado, sin que manifestara siquiera su intención de cumplir con los contratos de promesa celebrados. Así, sería evidente que Pampa Camarones habría incumplido los contratos de promesa, situación que se mantendría hasta la actualidad, incluso habiéndosele enviado comunicaciones escritas exigiendo la suscripción de las compraventas respectivas, que fueron recibidas con fecha 7 de octubre de 2016 en sus oficinas. Alega que el incumplimiento descrito genera perjuicios a su representada, los que se acrecientan día tras día.

Expresa que su representada es la dueña actual de todos los bienes muebles singularizados, así como de los derechos que corresponden a las promitentes vendedoras en los contratos de promesa cuya ejecución se demanda. Lo anterior, en virtud de los siguientes antecedentes: a) respecto de los camiones singularizados en la letra B, que constituyen el objeto de la promesa que consta en escritura de fecha 30 de mayo de 2016, Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada era a esa fecha dueña exclusiva de los mismos; b) Andacollo Soluciones Mineras S.A. suscribió uno de los contratos de promesa, en calidad de promitente vendedora, mediante escritura de fecha 30 de mayo de 2016, que tuvo por objeto el camión -del cual era dueña exclusiva- y las dos excavadoras, bienes señalados en la letra A. Respecto a las excavadoras, suscribió la referida promesa en ejercicio del mandato conferido por la sociedad Allpa Minería y Construcción S.A, hoy Compañía Minera Suyay S.A, otorgado para que la mandataria actuase a nombre propio, en atención a que el camión de propiedad de esta última operaba complementariamente a las máquinas de propiedad de la mandante, por lo que una venta en conjunto podría generar un mayor interés y utilidad para la eventual compradora; c) mediante escritura privada de 12 de agosto de 2016, Andacollo Soluciones Mineras S.A. vendió, cedió y transfirió a su representada el camión marca IVECO, P.P.U. DTPY 36-1. Por su parte, mediante escritura privada de 26 de septiembre de 2016, Compañía Minera Suyay S.A, antes Allpa Minería y Construcción S.A, vendió, cedió y transfirió a su representada, la excavadora inscripción DPZV57-6, Año 2012 y la excavadora inscripción DPZV81-9, año 2012;



Foja: 1

d) por su lado, mediante escritura pública de 7 de febrero de 2017, Andacollo Soluciones Mineras rindió cuenta de su mandato a Compañía Minera Suyay S.A, procediendo a efectuar la correspondiente cesión de derechos emanados del contrato de promesa suscrito en el ejercicio de su cometido, en relación con las excavadoras. Consecuentemente, esta última cedió aquéllos a su representada y lo mismo hizo directamente Andacollo Soluciones Mineras, con los derechos que le correspondían respecto al camión. Dice que en todas las cesiones se produjo la debida tradición mediante la entrega de los respectivos títulos; e) las correspondientes cesiones fueron notificadas a la promitente vendedora con fecha 21 de marzo de 2017, según consta en carta de notificación de cesiones de derechos y certificado de recepción, emitidos en la Notaría de Nancy de la Fuente; f) en consecuencia, sería Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada la actual propietaria de la totalidad de los derechos derivados de ambos contratos de promesa, cuyo cumplimiento se demanda.

Afirma que el artículo 1554 del Código Civil señala los requisitos que debe cumplir el contrato de promesa para producir obligaciones, todos los cuales se reunirían en este caso. Cita los artículos 578, 699 y 1489 del mismo cuerpo legal y señala que sería evidente el incumplimiento por parte de Pampa Camarones de un contrato bilateral, optando la demandante por exigir el cumplimiento forzado del pacto, con la respectiva indemnización de perjuicios. Asimismo, afirma que el Código sustantivo regula en sus artículos 1901 y siguientes la cesión de los créditos personales, normas que habrían sido cumplidas a cabalidad en las cesiones a que se hace alusión en el libelo. Se refiere a la responsabilidad contractual, indicando que consiste en la obligación de indemnizar al acreedor el perjuicio que le causa el incumplimiento del contrato o su cumplimiento tardío o imperfecto, por lo que, para su concurrencia, es necesario la existencia de un contrato, que se produzca un daño y que éste provenga de la inejecución de ese contrato u obligación. En este caso, asevera que el daño habría sido producido exclusivamente por la demandada, quien al incumplir los contratos de promesa de compraventa, habría generado, en consecuencia, la obligación de Pampa Camarones de indemnizar los perjuicios causados, respecto de cuya determinación -naturaleza y monto- se reserva para el cumplimiento incidental del fallo, en virtud del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil.

Pide se acoja la demanda y se declare que Pampa Camarones SpA. debe dar íntegro cumplimiento a los contratos de promesa celebrados con fecha 30 de mayo de 2016, además de indemnizar a la demandante los perjuicios derivados de



Foja: 1

su incumplimiento, cuya determinación de especie, naturaleza y monto se reserva para el cumplimiento incidental de fallo, más reajustes, intereses y costas.

Con fecha 10 de mayo de 2017 se notifica la demanda.

Con fecha 9 de agosto de 2018 la parte demandada contesta.

Señala que el 1 de abril de 2016, Pampa Camarones SpA. presentó una solicitud de apertura de un procedimiento concursal de reorganización judicial, que quedó radicada en el 16° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-8480-2016. Dice que dicha solicitud fue acogida, dictándose la resolución de reorganización el 1 de junio de 2016, siendo notificada a los acreedores y a todos los interesados en la misma fecha, mediante la publicación en el Boletín concursal. Agrega que el 8 de agosto de 2016 se celebró la junta deliberativa de acreedores llamada a pronunciarse sobre la propuesta de su representada, en la cual se acordó y aprobó el acuerdo de reorganización judicial propuesto, y se designó en calidad de interventor concursal a Enrique Ortiz D'Amico, quien ejercería dicha función hasta la actualidad. Asimismo, que mediante resolución de 1 de septiembre de 2016, el Tribunal tuvo por aprobado y plenamente vigente el acuerdo arribado por los acreedores. Adicionalmente, transcurrido el plazo legal, el acuerdo no fue impugnado por ninguno de los acreedores que son parte del acuerdo. Por tanto, concluye que desde esa fecha, el acuerdo adoptado por la junta de acreedores comenzó a producir sus efectos, de conformidad a la ley N° 20.720.

Indica que el veedor titular sr. Enrique Ortiz D'Amico, con fecha 26 de octubre de 2016, interpuso dos acciones revocatorias concursales, en atención a los acuerdos a que llegaron los acreedores, en cuya virtud se facultó al veedor para que dedujera las correspondientes demandas. Añade que las mencionadas acciones se entablaron justa y precisamente por la celebración de los siguientes contratos de promesa de compraventa: a) celebrada entre Pampa Camarones SpA y Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada, en la cual su representada concurrió como promitente compradora de tres camiones marca IVECO. El precio o la suma prometida por dicho contrato ascendía a \$186.000.000; b) celebrada entre Pampa Camarones SpA y Andacollo Soluciones Mineras S.A, en la cual su representada concurrió como promitente compradora de un camión marca IVECO y dos excavadoras marca Komatsu. El precio o la suma prometida por dicho contrato ascendía a \$334.000.000. Refiere que en las mencionadas escrituras, la cláusula sexta sería reveladora del conocimiento que tenía el contratante del mal estado de los negocios de Pampa Camarones SpA. Además, que el interventor, mediante las acciones revocatorias en comento, da cuenta de la existencia de motivaciones



Foja: 1

patrimoniales para su interposición, haciendo alusión al procedimiento concursal de liquidación de Allpa Operaciones Mineras S.A, Rol C-9.346-2016, causa seguida ante el 20° Juzgado Civil de Santiago. Expresa que el motivo de hacer alusión a dicho juicio dice relación con la diligencia de incautación de los bienes de la empresa practicada por Ximena Vera, en la cual constata y da cuenta de que los bienes objeto de la promesa de compraventa se encuentran en pésimas condiciones, lo que provocaría una desvalorización inminente de las cosas, y con ello, el consecuencial perjuicio a la masa de acreedores del acuerdo de reorganización de Pampa Camarones SpA.

Agrega que las acciones revocatorias interpuestas por el veedor tienen por finalidad obtener la revocación de los mismos contratos de promesa de compraventa que intenta ejecutar la demandante. Asimismo, que mediante junta deliberativa celebrada el 8 de agosto, los acreedores con derecho aprobaron una propuesta que dispone una serie de medidas, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer y, en definitiva, una serie de restricciones, que debe cumplir su representada, so pena de configurarse una causal de incumplimiento del acuerdo, lo que traería como consecuencia indefectible la liquidación concursal de Pampa Camarones SpA. En este sentido, hace presente que su representada se encuentra actualmente sometida a un régimen de intervención concursal, que los mismos acreedores acordaron. Afirma que dicha fiscalización sería ejercida actualmente por el interventor concursal sr. Enrique Ortiz D`Amico. Enfatiza que el texto del acuerdo, en el punto 3, dispuso una propuesta de pago que debe ser cumplida estrictamente por su representada, la que reprodujo. Así las cosas, considera se debe cumplir estrictamente los planes y plazos para pagar a todos los acreedores los créditos que se encuentran reconocidos, con lo que Pampa Camarones SpA se encontraría en la imposibilidad de cumplir el contrato, toda vez que se estaría afectando gravemente el principio de la *par conditio creditorum*, ya que el demandante obtendría un beneficio económico indebido y favorable respecto de todos los acreedores que adecuadamente concurrieron al procedimiento concursal de reorganización judicial. Por último, en el caso hipotético en que su representada fuera obligada a cumplir los contratos cuyo cumplimiento se demanda, plantea se expondría a una serie de acciones de carácter penal que prevé la legislación concursal.

Expresa que si bien es cierto su representada no puede cumplir el contrato que suscribió con Andacollo Soluciones Mineras S.A. y Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada, sería más relevante la circunstancia de encontrarse sometida a un acuerdo de reorganización judicial. Por lo anterior, estima que las promitentes



Foja: 1

vendedoras debieron hacer valer sus derechos oportunamente en el procedimiento concursal respectivo, verificando su crédito, al menos de forma condicional. Sin embargo, tal como constaría en la nómina de créditos reconocidos acompañada por el veedor al proceso del acuerdo, los acreedores no hicieron valer sus acreencias en dicha oportunidad, por lo que malamente podrían demandar el cumplimiento forzado de la obligación respecto de Pampa Camarones SpA. Destaca que el artículo 91 de la Ley N° 20.720 consagra lo que la doctrina ha denominado como el efecto *erga omnes* del acuerdo respecto de la totalidad de los acreedores de una empresa deudora, que considera oponible en todo su contenido a la contraria. Relacionado con lo anterior, dice que la disposición acordada por los acreedores corresponde a la reiteración de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley N° 20.720 y que, en consecuencia, se trata de un efecto que la propia ley consagra respecto de los acreedores comprendidos en cualquier acuerdo de reorganización judicial. Reitera que la demandante no puede intentar obtener el pago de un crédito respecto del cual no ejerció oportunamente los derechos que le confiere la legislación concursal y que, por lo tanto, no existe obligación de pago por parte de su representada.

Con fecha 21 de agosto de 2018 la parte demandante evacúa la réplica.

Sostiene que la demandada plantea respecto de las dos promesas de compraventa cuyo cumplimiento forzado se persigue en este juicio, la existencia de dos acciones revocatorias concursales interpuestas por el veedor sr. Enrique Ortiz D'Amico, en el procedimiento de reorganización judicial de Pampa Camarones SpA seguido ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-8480-2016, que configurarían una hipótesis de litispendencia. Afirma que esta alegación sería, en primer término, extemporánea. Explica que la litispendencia es una excepción dilatoria contemplada por el artículo 303 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, que solo puede hacerse valer dentro del término de emplazamiento para contestar la demanda (artículo 305, inciso 1°). Sin embargo, en dicha oportunidad procesal la demandada opuso a la demanda únicamente la excepción de incompetencia del tribunal, contemplada en el numeral primero del mismo artículo 303, pero no la de litispendencia, razón por la cual la oportunidad procesal para hacerlo habría precluido irrevocablemente, no encontrándose dentro de las posibles excepciones del artículo 305, inciso 2°. Añade que para que la sentencia que dicte el juez obligue a las partes, o sea, produzca los efectos de la cosa juzgada, es preciso que haya sido dictada por un juez que tenga jurisdicción y competencia para ello y que las partes que intervienen en el proceso se hayan sometido a su potestad, y que se entiende esto último desde que queda formada la relación procesal.



Foja: 1

Considera que, en consecuencia, los elementos que intervienen en la formación de la relación procesal válida serían tres: el juez, las partes –que son los sujetos de la relación procesal–y los actos procesales constitutivos de ella. Por tanto, el intento de plantear una alegación o defensa de litispendencia sería doblemente extemporáneo: lo es en cuanto excepción dilatoria que debió oponerse dentro del término de emplazamiento para contestar la demanda, y lo es también en cuanto pretendida alegación o defensa, ya que tal posibilidad solo cabría como incidente de nulidad, en el breve plazo legal previsto para promover esa clase de incidentes, todo lo cual resulta de los artículos 305, inciso 1°; 85 y 86, en relación con el artículo 83, todos del Código de Procedimiento Civil. Agrega que si lo anterior no fuera suficiente, la pretendida alegación de litispendencia sería, además, improcedente, por no configurarse en el caso concreto los requisitos exigidos por esa excepción, prueba de lo cual sería que la propia demandada no la dedujo junto con la excepción dilatoria de incompetencia que sí opuso, que fue rechazada en segunda instancia. Postula que, para que proceda la litispendencia, es necesario que haya otro juicio, seguido entre las mismas partes y persiguiendo la misma causa y objeto.

Señala que sin perjuicio de que la acción revocatoria concursal tramitada en el 16° Juzgado Civil de Santiago debe ser rechazada por ese tribunal –entre múltiples otras razones– por referirse a un crédito que no formó parte de la masa pasiva del concurso judicial de reorganización de Pampa Camarones SpA, lo cierto sería que en el caso concreto no concurre siquiera el requisito más básico de la litispendencia, como es la identidad legal de personas, puesto que de la revisión de esas acciones concursales advierte que en ellas el demandante es el veedor sr. Enrique Ortiz D’Amico, quien dedujo una de las revocatorias en contra de su representada y la otra en contra de la sociedad Andacollo Soluciones Mineras S.A, dirigiendo ambas acciones revocatorias, además, en contra de Pampa Camarones SpA, también en calidad de demandada. Es decir, el demandante en esa causa es el veedor antes citado, en cuanto persona facultada por la ley para deducir acciones revocatorias en los concursos en que actúa, y no la sociedad Pampa Camarones SpA, que es también parte demandada (aunque meramente formal) en dichas acciones revocatorias. Por último, indica que la alegación de litispendencia desconoce el fallo de la ltma. Corte de Santiago de 12 de julio de 2018, que se encuentra firme y ejecutoriado.

En cuanto a la alegación de la parte demandada de que por haber celebrado un acuerdo de reorganización judicial con sus acreedores, se hallaría imposibilitada de cumplir con los contratos de promesa, dado que ello importaría



Foja: 1

incumplir el citado acuerdo de reorganización judicial, favorecer a su representada (afectando la par conditio creditorum) y exponerse a una liquidación concursal e incluso a la comisión de infracciones penales, responde que la demandada parece no advertir que su afirmación constituye –a su modo de ver- un sinsentido legal, por proponer la imposibilidad de cumplimiento de los contratos de promesa fundada en que se cumplió (no en que falló) la específica condición suspensiva a la que se encontraban sujetos. Dicho lo cual, esgrime que la aprobación del acuerdo de reorganización era la condición para el nacimiento de la obligación de celebrar los contratos prometidos, y no una causa impeditiva para la celebración de éstos, conforme fluiría de la sola lectura de la cláusula sexta de los dos contratos materia de autos. Asegura que esa cláusula acredita con carácter de plena prueba entre las partes que la celebración de los contratos prometidos se sujetó a una condición suspensiva, según la cual debían celebrarse una vez que los acreedores de Pampa Camarones SpA aprobaran el acuerdo de reorganización judicial que esta les propondría, cuestión que ocurrió. Siendo la antedicha condición suspensiva plenamente válida y eficaz, su cumplimiento tuvo como consecuencia legal el nacimiento a la vida del derecho de la obligación de celebrar los contratos prometidos, y no como alega la contraria, la imposibilidad de cumplir con lo acordado.

Agrega que otro aspecto a considerar es la falta de efectividad de la afirmación según la cual el cumplimiento de las promesas contravendría lo acordado por Pampa Camarones y sus acreedores en el procedimiento de reorganización judicial. Al respecto, arguye que el crédito derivado de las promesas no formó parte del citado concurso por la sencilla razón de que, según lo dispone el propio acuerdo celebrado, solo podían formar parte del mismo los créditos existentes a la fecha de dictación de la resolución de reorganización, siendo un hecho incontrovertible que el crédito de su representada nació después, solo una vez que se aprobó el convenio por los acreedores de Pampa Camarones SpA, que sí intervinieron en el concurso. Plantea que ello no significa, sin embargo, que los acreedores de Pampa Camarones y el veedor no hayan conocido de la existencia de estas promesas. Por el contrario, ambos (veedor y acreedores) reconocieron su existencia en informes y en el propio acuerdo de reorganización, incluso separaron de la masa activa fondos suficientes para su cumplimiento, una vez que el acuerdo de reorganización quedara definitivamente aprobado, como constaría a lo menos de los siguientes antecedentes: a) en el mes de agosto de 2016 el veedor sr. Ortiz D'Amico emitió un primer informe en el procedimiento de reorganización judicial, en el cual contempló fondos destinados



Foja: 1

al cumplimiento de las promesas de autos, por un monto ascendente a la suma de \$520.000.000, que sería exactamente el valor resultante de la suma de los precios prometidos por ambas promesas de compraventa; y, b) con fecha 8 de agosto de 2016 se celebró la junta de acreedores de Pampa Camarones SpA, en la que sus acreedores acordaron la aprobación del acuerdo de reorganización propuesto por ella, cuyo texto refundido incluye en la letra d) del punto III la voluntad de reservar US\$1.000.000 para la compra de maquinaria, siempre que fuere procedente, por no más de \$520.000.000, cifra que cubriría exactamente el monto de los precios prometidos por ambas promesas, ascendentes a \$180.000.000 y \$340.000.000, respectivamente.

Afirma que la demandada alega que los derechos de su representada se habrían extinguido por no haber sido ejercidos oportunamente dentro del procedimiento de reorganización judicial de Pampa Camarones SpA. Al respecto y en primer término, señala que esa alegación sería contradictoria con la que la precede, y con las más elementales leyes de la lógica y del pensamiento. Ello porque de acuerdo con el principio de no contradicción, a veces llamado principio de contradicción, una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Estima que la demandada, sin embargo, alega conjuntamente tanto que las obligaciones de la promesa son imposibles de cumplir, por impedirlo el acuerdo de reorganización judicial, como que para poder obtener su cumplimiento su representada debió instar a ello en ese acuerdo de reorganización. En segundo término, considera que tal alegación ignora que el crédito de su parte no nació hasta que los acreedores de Pampa Camarones SpA aprobaron el acuerdo de reorganización, por lo que tratándose de créditos nacidos con fecha posterior a la de la resolución de reorganización, sería jurídicamente erróneo sostener que su representada haya debido hacer valer sus derechos en ese concurso. Además, no sería efectivo que su defendida sería de aquellos acreedores que se encontraban obligados a verificar créditos en dicho concurso, por cuanto al tiempo en que ese concurso se abrió, sus créditos todavía no surgían. Remarca que no existe disposición legal alguna que obligue al acreedor condicional a verificar créditos en el concurso, ya que las tres disposiciones de la Ley N° 20.720 que se refieren a los acreedores condicionales establecen la facultad de verificar créditos, como lo pone de manifiesto su artículo 249, cuando emplea la expresión “podrá”, para luego referirse a los limitados efectos que tiene la verificación del acreedor condicional. Esta misma expresión facultativa (“podrá”) es empleada en los artículos 144 N° 2 y 244 N° 4, cuando se refieren a los dos únicos casos de créditos condicionales que reconoce la ley concursal. En



Foja: 1

conclusión, estima que no configurándose ni la litispendencia, ni la imposibilidad de cumplimiento, ni la extinción de derechos alegada en la contestación por Pampa Camarones, procede se acoja la demanda.

Con fecha 30 de agosto de 2018 la parte demandada evacúa la réplica.

Sostiene que la demandante desconoce el valor que se debe asignar a los procesos en que se siguen las acciones revocatorias. No sería posible que el Tribunal prescindiera de la existencia de un procedimiento concursal específico en que se intentan revocar contratos, que por esta vía se intenta ejecutar. En segundo lugar, en cuanto a que en el texto del acuerdo de reorganización judicial se reservaron US\$1.000.000 para que su representada efectuara compra de maquinaria, responde que efectivamente en la letra d) del punto 3 del texto del acuerdo se estableció expresamente que: *“Asimismo, la compañía se reservará US\$1.000.000.- (un millón de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) para la compra de maquinaria, siempre que fuere procedente, por no más de \$520.000.000.- y el pago de la deuda preferente que no cubra el acuerdo”*. En este sentido, dice que la reserva de los dineros por parte de los acreedores no implicaba que Pampa efectuara la compra de las maquinarias sin sujeción a un análisis de conveniencia previo, sino que debía examinarse la procedencia de la compra de la maquinaria en base al examen que hiciera el interventor concursal y los acreedores interesados. Dicho lo cual, asegura que de un examen del estado y conservación de las máquinas, así como los términos y condiciones de los contratos que se intentan ejecutar, los acreedores derechamente facultaron al interventor concursal para la interposición de las acciones revocatorias que el 16° Juzgado Civil de Santiago está conociendo. Asimismo, indica que de informes periciales sería posible concluir que el valor comercial de los camiones habría disminuido, y que se encontrarían gravemente deteriorados. Refiere que estos antecedentes dan cuenta del grave perjuicio que ocasionaría a todos los acreedores la compra de la maquinaria que se pretende por la actora.

Respecto a la alegación de la demandante de que no tenía obligación de verificar créditos en la reorganización judicial de Pampa Camarones, esgrime que tal afirmación estaría fuera de toda lógica, ya que los contratos de promesa de compraventa son de fecha anterior a la resolución de reorganización, de modo que la demandante sí debía ejercer sus derechos oportunamente en la reorganización judicial.

Con fecha 2 de octubre de 2018 se llama a las partes a conciliación, sin éxito.



Foja: 1

Con fecha 12 de octubre de 2018 se recibe la causa a prueba.

Con fecha 11 de marzo de 2019 se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.EN CUANTO A LAS TACHAS:

PRIMERO: Que, la parte demandante alega la inhabilidad relativa de los testigos presentados por la parte demandada: Sofía Javiera Palazuelos Tomicic y Flavio Hernán Fuentes Olivares, por las causales contempladas en los numerales 5° y 6° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la primera, y de los numerales 4°, 5° y 6° del mismo precepto, respecto del segundo. Arguye respecto de la sra. Palazuelos Tomicic que habría declarado trabajar y recibir remuneraciones de forma habitual y periódica de la parte que la presenta a declarar, y que por prestar servicios por más de 2 años para ella, su testimonio sería parcial. En cuanto al sr. Fuentes Olivares, indica que las causales se configurarían porque el testigo declara ser dependiente de la demandada, recibiendo de ella una remuneración mensual por los trabajos que realiza, como también, en que por ser abogado de la empresa y tener un mandato judicial de representación, carecería de la imparcialidad necesaria para declarar.

Posteriormente, en exhorto Rol E-87-2019, se alega la causal del artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil respecto de la testigo María Cecilia Codoceo Medina, por señalar que trabaja para Pampa Camarones, desempeñando labores de encargada del Departamento de Prevención de Riesgos, por 8 años.

SEGUNDO: Que la parte demandada solicita el rechazo de las tachas. Respecto de la testigo Sofía Javiera Palazuelos Tomicic, porque las causales de los numerales 5° y 6° requerirían que el vínculo de dependencia tenga la aptitud de afectar gravemente su imparcialidad, en circunstancias que de lo dicho por la declarante no se lograría desprender lo anterior. Añade que la legislación laboral contemplaría un estatuto de protección respecto de los trabajadores, que evitaría represalias por parte del empleador, por lo que no habría una afectación a la imparcialidad del testigo, ni tiene un interés particular en el procedimiento. En cuanto al testigo Flavio Hernán Fuentes Olivares, señala que sería evidente que cualquier testigo tendrá alguna relación con las partes y los hechos y circunstancias sobre las que versa la contienda, reiterando los argumentos señalados respecto a la otra declarante e indicando que el testigo expondrá sobre



Foja: 1

los temas legales de la compañía demandada, ya que tiene un cargo de jefatura en el esquema organizacional, lo que desvirtuaría el vínculo de subordinación y dependencia.

Lo mismo señala para el caso de la testigo María Cecilia Codoceo Medina.

TERCERO: Que algunas de las tachas formuladas serán acogidas. Esto, porque de los dichos expresos y espontáneos de los tres testigos se colige inequívocamente que prestan servicios laborales para la empresa que los presenta a declarar, hecho que configura cabalmente la hipótesis del artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, causal que no es desconocida por Pampa Camarones SpA, puesto que apela a la necesidad de los testimonios, que es algo diferente.

Por otro lado, la existencia de procedimientos como la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales del párrafo 6° del Libro V del Código del Trabajo, tiene aplicación en controversias de naturaleza laboral, y dice relación con *“las represalias ejercidas en contra de trabajadores por el ejercicio de acciones judiciales, por su participación en ellas como testigo o haber sido ofrecidos en tal calidad”*, supuestos que no se condicen con la situación de autos, ya que los testigos en cuestión fueron presentados por el propio empleador, pero también, porque la figura del Código del Trabajo se refiere a los testigos del trabajador, cosa que lógicamente no ocurre en este caso civil.

Por todo lo cual, dándose los requisitos legales, se debe entender que los testigos son inhábiles para declarar en estos autos, porque carecen de imparcialidad necesaria para ilustrar al Tribunal acerca de la forma en que se suscitaron los hechos de la controversia, por lo que sus declaraciones no serán consideradas.

Las otras causales invocadas -4° y 6°- serán desestimadas, por no configurarse.

II.EN CUANTO AL FONDO:

CUARTO: Que, con el fin de acreditar sus asertos, la parte demandante rinde, en lo pertinente para la presente litis, la siguiente prueba instrumental:

1.- Copia de escritura pública de 30 de mayo de 2016, repertorio N° 16.538-2016, sobre promesa de compraventa, celebrada entre Pampa Camarones SpA, como promitente compradora, y Andacollo Soluciones Mineras S.A, como



Foja: 1

promitente vendedora, ambas debidamente representadas. En la cláusula primera se señala que la promotente vendedora es dueña de los siguientes bienes, que figuran en un anexo que es parte del contrato: a) Camión marca IVECO, modelo Trakker AD410T42H, serie WJM4CSS6CC245227, número de Motor 180516, año 2012, color rojo, PPU DTPY-36-1; b) Excavadora Komatsu, modelo PC 450 LC-8, número de serie 70847, número de motor 571237, inscripción DPZV57-6, año 2012; c) Excavadora Komatsu, modelo PC 450 LC-8, número de serie 70839, número de motor 57210, inscripción DPZV81-9, año 2012. En la cláusula segunda la promotente vendedora promete vender, ceder y transferir a la promotente compradora, quien por su parte promete comprar, aceptar y adquirir, todos y cada uno de los bienes de la cláusula primera. En la cláusula tercera se pactó el precio de la compraventa prometida, en la suma total de \$334.000.000, más IVA. En la cláusula quinta se indica que los bienes objeto de la compraventa se entregan en la fecha de celebración del instrumento. En la cláusula sexta se señala que el contrato de compraventa prometido deberá celebrarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de aprobación del acuerdo de reorganización judicial que la promotente compradora propondrá a sus acreedores, conforme al procedimiento contemplado en la Ley N° 20.720, lo que, en todo caso, ocurrirá a más tardar el día 30 de septiembre de 2016. La promesa quedará sin efecto sin ninguna obligación posterior para las partes ni derecho a indemnización alguna entre ellas, en caso que se declare la liquidación de la promotente compradora de conformidad la ley citada.

2.- Copia de escritura pública de 30 de mayo de 2016, repertorio N° 16.534-2016, sobre promesa de compraventa, celebrada entre Pampa Camarones SpA, como promotente compradora, y Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada, como promotente vendedora, ambas debidamente representadas. En la cláusula primera se señala que la promotente vendedora es dueña de los siguientes bienes, que figuran en un anexo que es parte del contrato: a) Camión Marca IVECO, modelo Trakker AD410T42H, N° serie WJM4CSS6CC244838, N° Motor 179741, año 2012, color rojo, PPU DRSG-59-9; b) Camión Marca IVECO, modelo Trakker AD410T42H, N° serie WJM4CSS6CC244676, N° Motor 175354, año 2012, color rojo, PPU DRSG-47-5; c) Camión Marca IVECO, modelo Trakker AD410T42H, N° serie WJM4CSS6CC244679, N° Motor 179340, año 2012, color rojo, PPU DRSG-50-5. En la cláusula segunda la promotente vendedora promete vender, ceder y transferir a la promotente compradora, quien por su parte promete comprar, aceptar y adquirir, todos y cada uno de los bienes de la cláusula primera. En la cláusula tercera se pactó el precio de la compraventa prometida, en la suma total



Foja: 1

de \$186.000.000, más IVA. En la cláusula quinta se indica que los bienes objeto de la compraventa se entregan en la fecha de celebración del instrumento. En la cláusula sexta se señala que el contrato de compraventa prometido deberá celebrarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de aprobación del acuerdo de reorganización judicial que la promitente compradora propondrá a sus acreedores, conforme al procedimiento contemplado en la Ley N° 20.720, lo que, en todo caso, ocurrirá a más tardar el día 30 de septiembre de 2016. La promesa quedará sin efecto sin ninguna obligación posterior para las partes ni derecho a indemnización alguna entre ellas, en caso que se declare la liquidación de la promitente compradora de conformidad la ley citada.

3.- Copia de escritura pública de 7 de febrero de 2017, repertorio N° 4714-2017, sobre rendición de cuentas y cesiones de derechos, celebrada entre Compañía Minera Suyay S.A, antes ALLPA Minería y Construcción S.A; Andacollo Soluciones Mineras S.A; y Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada. Se señala en la cláusula primera como “antecedentes” que con fecha 29 de abril de 2016 ALLPA Minería Y Construcción S.A, actualmente Compañía Minera Suyay S.A, encargó a Andacollo Soluciones Mineras S.A. la venta a nombre propio de las siguientes maquinarias, que a esa data eran de su propiedad: 1) Excavadora Komatsu, Modelo PC 450LC-8, número de serie 70847, número de motor 571237, inscripción DPZV57-6, año 2012; 2) Excavadora Komatsu, Modelo PC 450LC-8, número de serie 70839, número de motor 57210, inscripción DPZV81-9, año 2012. También indica que se facultó a la mandataria para suscribir todos los instrumentos que fuere necesario para llevar a cabo su encargo, incluso preparatorios. En la cláusula cuarta, Andacollo Soluciones Mineras S.A. cede y transfiere los derechos que le corresponden en calidad de promitente vendedora a Compañía Minera Suyay S.A, en la promesa de compraventa de 30 de mayo de 2016, que tuvo por objeto las excavadoras singularizadas en la cláusula primera del instrumento, los que, a través de su representante, acepta y adquiere para sí. En la cláusula quinta Suyay acepta en todas sus partes la rendición de cuentas efectuada por Andacollo, expresada en las cláusulas anteriores, otorgando a su respecto amplio, completo y total finiquito. En la cláusula sexta se expresa que con fecha 26 de septiembre de 2016 Allpa Minería y Construcción S.A, hoy Compañía Minera Suyay S.A, vendió cedió y transfirió a la sociedad Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada, las máquinas singularizadas en la cláusula primera del mismo instrumento, con pleno conocimiento de la última acerca de la promesa de compraventa singularizada en la cláusula tercera. Las partes estaban de acuerdo en que la transferencia de dominio involucraba la totalidad de los derechos que



Foja: 1

correspondían a la vendedora en relación con las máquinas objeto de la compraventa. En atención a lo recién expresado, Suyay cede y transfiere sus derechos en la promesa, en calidad de promitente vendedora, adquiridos según da cuenta la cláusula cuarta precedente, de Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada, actual propietaria de las excavadoras singularizadas en la cláusula primera de este instrumento, los que, a través de su representante, acepta y adquiere para sí. En la cláusula séptima, se señala que por instrumento privado de 12 de agosto de 2016, ASM vendió, cedió y transfirió a Chiloé Limitada el camión de su propiedad marca IVECO, modelo Trakker AD 410T42H, número de serie, WJM4C5S6CC245227, número de motor 180516, con pleno conocimiento de la última, respecto de la promesa de compraventa singularizada en la cláusula tercera. Las partes estaban de acuerdo en que la transferencia de dominio involucraba la totalidad de derechos que correspondían a la vendedora en relación con el camión señalado. ASM cede y transfiere a Chiloé Limitada los derechos que le corresponden en la promesa de compraventa de 30 de mayo de 2016, por escritura pública otorgada en la Notaría de Eduardo Avello Concha, respecto del camión mencionado.

4.- Copia de carta de fecha 21 de marzo de 2017, enviada por la Notario Público Nancy de la Fuente H. a Pampa Camarones SpA. Su tenor es para notificar que Andacollo Soluciones Minera S.A, en su calidad de promitente vendedora, ha cedido a Compañía Minera Suyay S.A, quien a su vez cedió a Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada, los derechos personales o créditos derivados de la escritura pública de promesa de compraventa que suscribió con Pampa Camarones SpA. con fecha 30 de mayo de 2016. En especial, respecto de los derechos que recaen sobre dos excavadoras marca Komatsu. Se acompaña certificado de igual fecha en que se señala que se hizo entrega de la misiva en la oficina de Pampa Camarones SpA.

5.- Copia de texto refundido del acuerdo de reorganización de Pampa Camarones S.A. En su punto I se señala que la propuesta con arreglo al artículo 66 de la Ley N° 20.720 comprende a todos los acreedores comunes cuyos créditos tengan su origen hasta el día anterior a la fecha de la resolución de reorganización, tengan o no derecho a voto y cualquiera sea la fuente de la obligación. Los créditos nacidos en fecha posterior no quedan afectos a este acuerdo. Los acreedores con preferencia de cualquier tipo, serán afectados por el acuerdo si renuncian a sus preferencias, en la parte en que renuncien y por el saldo valista de sus créditos. En el punto II, número 3, relativo a la propuesta de pago, se indica en la letra d): *“Asimismo, la compañía se reservará US\$*



Foja: 1

1.000.000.- (un millón de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) para la compra de maquinaria, siempre que fuere procedente, por no más de \$520.000.000 y el pago de la deuda preferente que no cubra el crédito y el déficit entre los ingresos y egresos desde la resolución de la reorganización y la fecha de cierre, incluidos los honorarios legales, conceptos que no podrán superar dicho monto”.

6.- Copia de resolución de fecha 1 de septiembre de 2016, dictada por el 16° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-8480-2016, en virtud de la cual se tiene por aprobado el acuerdo de reorganización judicial de Pampa Camarones SpA, y se ordena su publicación en el boletín concursal.

7.- Copia de dos cartas datadas el 3 de octubre de 2016, con recepción el 7 de octubre del mismo año, emitidas por Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada, dirigidas a Pampa Camarones SpA. Señalan que el acuerdo de reorganización se aprobó con fecha 8 de agosto de 2016 y que la resolución respectiva fue incluida en boletín concursal con fecha 1 de septiembre de ese año, por lo que se deben suscribir las compraventas prometidas.

8.- Copia de acta de audiencia Ley N° 20.720, correspondiente a la junta de acreedores del acuerdo de reorganización, de fecha 8 de agosto de 2016, en causa Rol C-8480-2016, seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago. Se inserta el texto refundido del acuerdo de reorganización de Pampa Camarones S.A, que es aprobado por la junta y posteriormente por el Tribunal.

9.- Copia de resolución en causa Rol C-8480-2016, seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, en que se certifica que la resolución de fecha 1 de septiembre de 2016, se encuentra firme y ejecutoriada.

QUINTO: Que, por su lado, con el fin de acreditar sus alegaciones, excepciones y defensas, la parte demandada rinde, en lo pertinente para la litis, la siguiente prueba instrumental:

1.- Copia de la resolución dictada con fecha 25 de mayo de 2017 en causa Rol C-8480-2016, seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, que por objeto designar un perito tasador, recayendo tal gestión en Nicolás Alarcón Sánchez.

2.- Copia de un informe pericial de 29 de agosto de 2018, evacuado por Nicolás Alarcón Sánchez, en causa Rol C-8480-2016, seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, titulado: “Tasación valor comercial de maquinaria empleada para movimiento de tierra, incluida en promesa de compraventa de fecha 30 de mayo



Foja: 1

de 2016, entre Pampa Camarones SpA, y Andacollo Soluciones Mineras S.A.". En sus conclusiones, el informante afirma: "Del conocimiento de los antecedentes adjuntos a la causa, la inspección física realizada y la información recabada por este perito informante, en lo que respecta a los equipos evaluados y atendiendo a la premisa de que el valor comercial está directamente unido a las condiciones del bien evaluado, se presenta la conclusión para los puntos que dieron origen a esta pericia: para el caso de camión IVECO, año 2012, mod. Trackker AD10T42H, si bien posee signos de deterioro imputables tanto al uso, como a la exposición prolongada a la intemperie, y habiéndose comprobado que este equipo no ha sido operado o movido en un largo periodo. Es opinión de este perito, que existe amplias posibilidades de que el vehículo en cuestión se encontraba operativo al momento de la celebración de "la promesa de compraventa", y por tanto poseedor de un valor comercial o de mercado equivalente al de unidades similares en cuanto a uso y antigüedad a la fecha de dicho contrato. Se consideran como referencias de mercado las ofertas individualizadas en publicaciones de sitios web, adjuntas en anexo 8 de la presente pericia, las cuales son ajustadas principalmente por estado y por el decremento en el valor, que reconoce el mercado sobre equipos empleados en faenas de uso intensivo como lo es la minería. Para el caso de ambas excavadoras Komatsu mod. PC 450 LC-8, año 2012, se concluye que dichos equipos ya poseían un alto grado de deterioro producto principalmente de un retiro desmantelamiento de componentes, que se concluye anterior a la fecha de "La Promesa de Compraventa", por tanto, su valuación debe reflejar dicho estado. El valor comercial de estos equipos (fuera de operación e imposibilitados de ser recuperados o restaurados para prestar servicios), se limitaría a la posibilidad de vender componentes a un mercado secundario de reparación de maquinaria. Sin embargo y dado que gran parte de los componentes importantes y poseedores de un atractivo comercial, ya fueron retirados, se opta por realizar un análisis para la estimación de un valor en base a la comercialización del equipo como desecho o chatarra, en consideración al valor que se obtenga por kilogramo de acero. Para lo anterior, se tiene que cada una de las máquinas posee un peso bruto de alrededor de 40.000 kg, mientras que el valor de la chatarra entregada en un centro de acopio fluctúa entre los \$40 y \$50 (valores para fierro en sobremedida — sin tronzar). Sin embargo, se entiende que el valor comercial que la entidad podría obtener actualmente por la enajenación bajo el concepto de desecho o chatarra de los equipos corresponde importe estimado después de deducir los costos necesarios por tal enajenación. Esto es, los costos por gestiones de comercialización, costos por carguío y costos por transporte al punto de disposición. De lo anterior se tiene: Estimación ingreso



Foja: 1

bruto $2 \times 40.000 \times 50 = \$4.000.000$. Estimación arriendo día camión grúa-pluma para carguío= $\$700.000$. Estimación arriendo camión traslados $2 \times \$1.400.000 = \$2.800.000$. De los cálculos anteriores, es factible concluir la inexistencia de un valor comercial para dichos equipos, toda vez que las estimaciones de costos requeridas para su comercialización son prácticamente similares a los posibles beneficios a obtener”.

El informe agrega: “ 1.- *Valorización de los bienes objeto del contrato de promesa de Compraventa de fecha 30 de mayo de 2016, otorgada ante el Notario Titular de la Vigésima Séptima Notaria de Santiago, don Eduardo Avello Concha, Repertorio 16.538-2016. Valor comercial estimado para camión IVECO, año 2012, mod. Trackker AD10T42H, patente DTPY-36.1, es de \$42.000.000, son cuarenta millones de pesos al 30 de mayo de 2016. Valor comercial estimado para excavadora hidráulica sobre orugas Komatsu mod. PC 450 LC-8, año 2012, número fabricante 70847, es de \$0, no posee valor comercial o su importe estimado es insuficiente para cubrir los costos de enajenación. 2.- Valor que se considere prevaleciente en el mercado, en las condiciones que se encontraban los bienes objeto del contrato de promesa a la época de celebración de dicho contrato. Valor comercial estimado para camión IVECO, año 2012, mod. Trackker AD10T42H, patente DTPY-36.1, es de \$24.000.000, son veinticuatro millones de pesos a junio de 2018. Valor comercial estimado para excavadora hidráulica sobre oruga Komatsu mod. PC 450 LC-8, año 2012, número fabricante 70847, es de \$0, no posee valor comercial o su importe estimado es insuficiente para cubrir los costos de enajenación. Valor comercial estimado para excavadora hidráulica sobre orugas Komatsu mod. PC 450 LC-8, año 2012, número fabricante 70839, es de \$0, no posee valor comercial o su importe estimado es insuficiente para cubrir los costos de enajenación” (sic).*

3.- Copia de escrito presentado por Andacollo Soluciones Mineras S.A. en la causa Rol C-8480-2016, seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, sobre observación de informe pericial.

4.- Copia de resolución de fecha 10 de enero de 2018, dictada en causa Rol C-8480-2016, seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, que rechaza objeción y nulidad respecto del informe pericial.

5.- Copia de acta de audiencia Ley N° 20.720, correspondiente a la junta de acreedores del acuerdo de reorganización, de fecha 8 de agosto de 2016, en causa Rol C-8480-2016, seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago. El documento es el mismo presentado por la parte demandante.



Foja: 1

6.- Copia de hojas de un libro, de fecha 4 de abril de 2016, donde se indica: "Por acuerdo de los accionistas de PCSA en conjunto con Minería Activa se detienen las operaciones de perforación y tronadura a partir del 01 de abril del año 2016 y se detienen las operaciones de carguío y transporte hasta nuevo aviso".

7.- Copia de carta de fecha 28 de abril de 2016 enviada por Pampa Camarones SpA. al Director Regional de Sernageomin. El motivo de la epístola es informar la suspensión temporal de las operaciones extractivas en la mina Salamanqueja.

8.- Copia de presentación de solicitud de inicio de procedimiento concursal de reorganización, de fecha 1 de abril de 2016, deducida por Pampa Camarones SpA, causa Rol C-8480-2016, seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago.

9.- Copia de resolución de fecha 1 de junio de 2016, en causa Rol C-8480-2016, seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, sobre inicio de procedimiento concursal, que tiene por presentada la solicitud de reorganización judicial de empresa de Pampa Camarones SpA. En el acto se designa como veedor titular a Enrique Marco Antonio Ortiz D'Amico.

10.- Copia de demanda en juicio sumario sobre acción revocatoria concursal, de fecha 26 de octubre de 2016, tramitada en el 16° Juzgado Civil de Santiago, por el veedor Enrique Marco Antonio Ortiz D'Amico, en representación de Pampa Camarones SpA, en contra de Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada. En el petitorio solicita: *"Acoger la demanda declarando lo siguiente: 1) Que se revoca el contrato de promesa de compraventa celebrado con fecha 30 de mayo de 2016 entre Pampa Camarones SpA., y Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada celebrado ante el Notario Titular de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, dejándose sin efecto. 2) Señalar expresamente el monto que el Tribunal estime correspondiente a la diferencia entre de valor entre el contrato de promesa de compraventa revocado y el valor que considere prevaleciente en el mercado bajo similares condiciones a las existentes a la época de dicho contrato. 3) Condenar expresamente en costas a las demandadas"*.

11.- Copia de actuación de fecha 12 de junio de 2017, en causa Rol C-8480-2016, seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, sobre comparendo celebrado en dicha fecha.

12.- Copia de presentación realizada por la parte demandante en procedimiento sumario de acción revocatoria concursal, en los autos sobre



Foja: 1

procedimiento concursal caratulados "Puga con Pampa Camarones SpA", causa Rol C-8480-2016, seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago. Se solicita se cite a las partes a oír sentencia.

13.- Copia de demanda en juicio sumario sobre acción revocatoria concursal, de fecha 26 de octubre de 2016, en el 16° Juzgado Civil de Santiago, presentada por el veedor Enrique Marco Antonio Ortiz D'Amico, en representación de Pampa Camarones SpA, en contra de Andacollo Soluciones Minera S.A. En el petitorio solicita: *"Acoger la demanda declarando lo siguiente: 1) Que se revoca el contrato de promesa de compraventa celebrado con fecha 30 de mayo de 2016 entre Pampa Camarones SpA., y Andacollo Soluciones Minera S.A. celebrado ante el Notario Titular de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, dejándose sin efecto. 2) Señalar expresamente el monto que el Tribunal estime correspondiente a la diferencia entre de valor entre el contrato de promesa de compraventa revocado y el valor que considere prevaleciente en el mercado bajo similares condiciones a las existentes a la época de dicho contrato. 3) Condenar expresamente en costas a las demandadas"*.

14.- Copia de actuación de fecha 21 de marzo de 2017, en causa Rol C-8480-2016, seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, sobre comparendo celebrado en dicha fecha.

15.- Copia de presentación de fecha 6 de julio de 2016, realizada por el apoderado de Enrique Marco Antonio Ortiz D'Amico, en autos sobre procedimiento concursal Rol C-8480-2016, seguidos ante el 16° Juzgado Civil de Santiago. El tenor da cuenta de una solicitud de ampliación de la nómina de créditos reconocidos.

16.- Copia de resolución de fecha 7 de febrero de 2019, en causa Rol C-8480-2016, seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, que cita a la partes a oír sentencia.

SEXTO: Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, consistentes en instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones fundadas en causal legal acogidas respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce a los instrumentos señalados el valor probatorio que la propia Ley les atribuye, según su naturaleza, salvo los privados emitidos por terceros y que no fueron ratificados en juicio.



Foja: 1

En tal orden de ideas, la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio corresponde hacerla en la forma dispuesta por el legislador. Por tanto, respecto de los instrumentos públicos *“Se entiende que en cuanto a la existencia de su contenido, es decir, al hecho de que él fue declarado por las partes, tiene valor de plena prueba; y que en cuanto a la sinceridad de las declaraciones entre las partes también hace plena prueba”* (Excma. Corte Suprema, Rol N° 45.940 -2016).

Resulta importante recordar que la autenticidad del instrumento público se presume, de modo que quien lo presenta no está obligado a probarla y quien lo objeta de falso debe así acreditarlo. Por el contrario, si la otra parte impugna la autenticidad de un instrumento privado no reconocido, el peso de la prueba de ser auténtico recae en aquel que lo hace valer. La prueba de autenticidad del instrumento privado recae en quien lo presenta, si la otra parte impugna su falsedad o falta de integridad, lo que no hace en este juicio. En efecto, el instrumento privado que no aparece firmado por la persona contra la cual se opone, carece de relevancia jurídica, puesto que no está amparado por la presunción de autenticidad propia de los públicos y se aplican a su respecto las reglas generales en materia de prueba especialmente el artículo 1698 del Código Civil, en cuanto debe probar la situación jurídica alegada quien la pretende para sí.

SEPTIMO: Que en base a la prueba rendida y valorada, se tienen por establecidos los siguientes hechos:

a) Que con fecha 30 de mayo de 2016, Pampa Camarones SpA. suscribe mediante escritura pública dos contratos de promesa de compraventa: i) con Andacollo Soluciones Mineras S.A, como promitente vendedora, por tres bienes consistentes en: un camión marca IVECO, modelo Trakker AD410T42H, serie WJMJ4CSS6CC245227, número de motor 180516, año 2012, color rojo, PPU DTPY-36-1; una excavadora Komatsu, modelo PC450LC-8, número de serie 70847, número de motor 571237, inscripción DPZV57-6, año 2012; y una excavadora Komatsu, modelo PC450LC-8, número de serie 70839, número de motor 57210, inscripción DPZV81-9, año 2012; y, ii) con Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada, como promitente vendedora, por tres bienes consistentes en: un camión marca IVECO, modelo Trakker AD410T42H, número de serie WJMJ4CSS6CC244838, número de motor 179741, año 2012, color rojo, PPU DRSG-59-9; un camión marca IVECO, modelo Trakker AD410T42H, número de serie WJMJ4CSS6CC244676, número de motor 175354, año 2012, color rojo, PPU DRSG-47-5; y un camión marca IVECO, modelo Trakker AD410T42H,



Foja: 1

número de serie WJM4CSS6CC244679, número de motor 179340, año 2012, color rojo, PPU DRSG-50-5. El precio pactado para la compraventa prometida, era la suma \$334.000.000, más IVA, en el caso del primer contrato, y de \$186.000.000, más IVA, para el segundo. Los bienes fueron entregados a Pampa Camarones SpA. en la fecha de celebración de los contratos.

b) Que los contratos prometidos debían suscribirse dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de aprobación del acuerdo de reorganización judicial que la promitente compradora propondría a sus acreedores conforme al procedimiento contemplado en la Ley N° 20.720, lo que, en todo caso, debía ocurrir a más tardar el 30 de septiembre de 2016.

c) Que con fecha 8 de agosto de 2016, en causa Rol C-8480-2016, seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, se celebra la junta de acreedores en el proceso de reorganización judicial de Pampa Camarones SpA, órgano que aprueba el texto del acuerdo de reorganización. Se designa como veedor al sr. Enrique Marco Antonio Ortiz D'Amico. Lo anterior es aprobado por el Tribunal y se ordena la publicación del acta en el Boletín Concursal.

d) Que con fecha 1 de septiembre de 2016, el 16° Juzgado Civil de Santiago constata la inexistencia de impugnaciones en contra del acuerdo y encontrándose vencido dicho plazo, tiene por aprobado el acuerdo de reorganización judicial de Pampa Camarones SpA. Posteriormente se certifica que dicha resolución se encuentra ejecutoriada.

e) Que con fecha 26 de octubre de 2016, el veedor Enrique Marco Antonio Ortiz D'Amico, en representación de Pampa Camarones SpA, deduce ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-8480-2016, dos acciones revocatorias concursales respecto de los contratos de promesa de compraventa de 30 de mayo de 2016, entre Pampa Camarones SpA y Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada, por un lado, y entre Pampa Camarones SpA y Andacollo Soluciones Minera S.A, por otro. En las demandas se pide se revoquen estas convenciones.

f) Que con fecha 7 de febrero de 2017 y mediante escritura pública, Andacollo Soluciones Mineras S.A. cede sus derechos en el contrato de promesa de compraventa de fecha 30 de mayo de 2016 a Compañía Minera Suyay S.A, la que en el mismo acto cede sus derechos a Rentas e Inmobiliaria Chiloé S.A, quedando esta última como la promitente vendedora en la convención.



Foja: 1

g) Que con fecha 21 de marzo de 2017, se notifica mediante carta enviada por una Notario Público, la cesión de derechos realizada a Rentas e Inmobiliaria Chiloé S.A.

h) Que con fecha 7 de febrero de 2019, en causa Rol C-8480-2016, seguida ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, se cita a las partes a oír sentencia respecto de las dos acciones revocatorias concursales deducidas por Pampa Camarones SpA, respecto de las convenciones objeto de esta controversia.

OCTAVO: Que la acción deducida encuentra su fundamento en el artículo 1489 del Código Civil, que dispone: *“En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios”.*

En tal sentido y como primera cuestión, debe examinarse la existencia de un vínculo obligacional que ligue a las partes de esta contienda, antecedente que más allá de las probanzas rendidas en tal sentido, resulta ser pacífico, puesto que las partes no discuten que mediante escrituras públicas de 30 de mayo de 2016 y en virtud de la cesión de derechos efectuada a la demandante, se generó una relación jurídica de naturaleza bilateral, consistente en dos contratos de promesa de compraventa.

NOVENO: Que el siguiente elemento para la prosperidad de la acción dice relación con la existencia de un incumplimiento contractual, en razón de culpa o dolo. Al respecto, fluye que la obligación esencial de las partes era suscribir el contrato prometido de compraventa, dentro del plazo establecido en las convenciones. En ambos instrumentos se dispuso, en su cláusula sexta, que los contratos prometidos debían celebrarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de aprobación del acuerdo de reorganización judicial que la promitente compradora propondría a sus acreedores, conforme al procedimiento contemplado en la Ley N° 20.720, lo que en todo caso debía ocurrir a más tardar el 30 de septiembre de 2016.

Por tanto, la suscripción del contrato de compraventa estaba sujeta a una condición suspensiva y a un plazo determinado, dentro del cual necesariamente debía nacer a la vida del derecho.

Pues bien, conforme a la prueba valorada, se constata que la condición pactada quedó cumplida, inequívocamente, el 1 de septiembre de 2016, cuando el



Foja: 1

16° Juzgado Civil de Santiago tuvo por definitivamente aprobado el acuerdo de reorganización judicial que Pampa Camarones SpA propuso a su junta de acreedores el 8 de agosto de ese año. Desde ese momento empezó a correr el plazo de 30 días, con la limitación de que el contrato no podía celebrarse más allá del 30 de septiembre de 2016, por lo que debe considerarse que esa fue la fecha límite en que las compraventas prometidas debieron concretarse.

Así, acreditada la existencia de la obligación y delimitado el tiempo en que debía cumplirse, constando además que la demandante entregó las especies y que éstas fueron recibidas por Pampa Camarones, conforme a las declaraciones efectuadas en los instrumentos públicos, era carga de la demandada demostrar el cumplimiento de sus propias obligaciones, y entre éstas, primeramente, la de suscribir los contratos prometidos, cuestión que no ha ocurrido, conforme se reconoce en la contestación, declaración que constituye una verdadera confesión espontánea y voluntaria, cuya valoración se efectúa al alero de lo que disponen los artículos 1713 del Código Civil y 426 del Código de Procedimiento Civil. Unido a lo anterior y como consecuencia de lo que se viene razonando, se concluye que el incumplimiento ha sido culpable, atento a lo establecido en el artículo 1547 del Código Civil, toda vez que la demandada no acreditó diligencia y/o cuidado en la ejecución del contrato de promesa, por lo que no consiguió desvirtuar la presunción legal que operaba -al respecto- en su contra, todo lo cual permite tener por configurado el segundo de los presupuestos de la acción intentada, a la vez que tener a la demandada en mora, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1551 N° 1 del Código Sustantivo.

DECIMO: Que, por tanto, como la parte demandante entregó -con fecha 30 de mayo de 2016- las seis cosas muebles que eran objeto de los contratos prometidos, se colige que Rentas e Inmobiliaria Chiloé Limitada se encuentra en la posición jurídica de ser un contratante diligente y llano a cumplir con su obligación principal, concurriendo de esa manera la totalidad de los requisitos necesarios para hacer lugar a la acción de cumplimiento sometida al conocimiento y resolución de este Tribunal.

UNDECIMO: Que, por otro lado, en relación a la reserva que ha efectuado la actora en orden a discutir la especie y monto de los perjuicios que solicita, cabe destacar que el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil prevé: “Cuando una de las partes haya de ser condenada a la devolución de frutos o a la indemnización de perjuicios, y se ha litigado sobre su especie y monto, la sentencia determinará la cantidad líquida que por esta causa deba abonarse, o



Foja: 1

declarará sin lugar el pago, si no resultan probados la especie y el monto de lo que se cobra, o, por lo menos, las bases que deban servir para su liquidación al ejecutarse la sentencia. / En el caso de que no se haya litigado sobre la especie y el monto de los frutos o perjuicios, el tribunal reservará a las partes el derecho de discutir esta cuestión en la ejecución del fallo o en otro juicio diverso”.

La norma en análisis, prevista para la responsabilidad contractual, contempla tres supuestos: a) si se hubiera litigado sobre la especie y monto de los perjuicios y se probaren estos extremos, la sentencia debe determinar la cantidad líquida a la que debe ser condenado el demandado; b) si se hubiera litigado sobre la especie y monto de los perjuicios y no se resultare probada la especie y monto de lo que se cobra o, al menos, las bases que deban servir para su liquidación, el sentenciador debe declarar sin lugar la pretensión indemnizatoria y; c) en el supuesto que no se hubiere litigado sobre la especie y monto de los perjuicios, el tribunal debe reservar a las partes el derecho de discutir estas cuestiones en la ejecución o en un juicio diverso (en este sentido, la consideración cuarta de la sentencia de casación en el fondo de 3 de junio de 1921, en relación al recurso interpuesto por el demandante, en la causa caratulada Maino con Castagneto Hermanos, en R.D.J. año XI, 1923, p. 393).

En la especie, se pretende la aplicación de la hipótesis descrita en la letra c) del párrafo anterior. Para dilucidar esta cuestión cabe tener presente que es condición de aplicación de cualquiera de los supuestos del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, el hecho de que se haya litigado y probado al menos sobre los perjuicios, que es una cuestión distinta de su especie y monto, finalmente a lo que se refiere la norma transcrita. Ello quiere decir que es preciso que la existencia de los daños se haya introducido al proceso, por medio de los escritos correspondientes, y que dichos perjuicios hubieren sido tema de prueba y que se encontraren probados. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado: “Que la reserva contemplada en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil alcanza sólo a la especie y monto de los frutos o perjuicios, de forma tal que, aún en ese evento, la actora está obligada a demostrar durante la substanciación del juicio, la existencia o efectividad de unos y otros. Conforme a ello, la pretensión examinada no puede prosperar en el caso sub lite. Desde luego, porque en esa demanda nada se explica ni expresa acerca de cuáles serían concretamente los frutos y en qué consistirían los deterioros que se reclaman (...)” (consideración quinta de la sentencia de remplazo en la casación en el fondo de 24 de junio de 2002, en la causa caratulada Silva, Julia con Pinto, Lautaro, en R.D.J. Tomo XCIX, 2002, pp. 265-266). En similar sentido: “Que sin perjuicio de haber aplazado el debate sobre



Foja: 1

los daños, es necesario que la existencia de los mismos quede determinada en este juicio, en tanto que su regulación de especie y monto quedará relegada a otro estadio del proceso u otro juicio diverso, bastando que su determinación sea en términos genéricos, por cuanto en caso contrario no se justificaría el sentido del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, norma que precisamente contempla tal alternativa por la cual ha optado el actor al momento de interponer la demanda.” (Consideración sexta de la sentencia de remplazo en la casación en el fondo de 7 de junio de 2010, rol de ingreso a la Corte N° 430-10).

En el caso sub lite, la actora no ha hecho ni siquiera referencias amplias a diversos hechos que podrían haberle producido daños, remitiéndose a concluir simplemente que éstos serían consecuencia de la negativa de la demandada de suscribir los contratos prometidos. En tal sentido, debe considerarse que el tribunal fijó entre los hechos a probar, precisamente, la existencia de los perjuicios sufridos (puntos 7° y 8° de la resolución que recibió la causa a prueba). De esta manera, la demandante tuvo la oportunidad procesal para acreditar, aun genéricamente, los daños que dijo haber sufrido. Por ende, no se dará lugar a la petición de reservar la determinación de estos perjuicios para una etapa procesal posterior o distinta, por no haberse demostrado su existencia, de conformidad al derecho que se invoca, vale decir, el recurso excepcional del artículo 173 del Código de Enjuiciamiento.

DUODECIMO: Que, por último, las alegaciones formuladas por la parte demandada relativas a que no ha cumplido lo pactado en los contratos de promesa por encontrarse en un proceso de reorganización judicial, porque habría deducido dos acciones revocatorias concursales respecto de dichas convenciones en un proceso ventilado ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, y porque los bienes se encontrarían en un estado de deterioro, serán rechazadas.

Al respecto y en primer lugar, el que Pampa Camarones se encuentre en un proceso de reorganización judicial al alero de la Ley N° 20.720 no afecta el compromiso que asumió de cumplir las obligaciones que contrajo, máxime cuando en las mismas convenciones -en su cláusula sexta- se estableció como condición suspensiva para el nacimiento del deber de suscribir los contratos prometidos, la aprobación por parte de los acreedores de la demandada del acuerdo de reorganización judicial que ésta les iba a proponer, presupuesto que quedó irremediablemente determinado con fecha 1 de septiembre de 2016.

Pampa Camarones estaba en perfecto conocimiento de su situación financiera, y en razón de ello se condicionó el nacimiento de las compraventas



Foja: 1

prometidas, cosa que no puede ahora desconocer, desde que de aceptarse se estaría tolerando una suerte de maniobra que significaría, en los hechos, una evasión respecto de sus deberes convencionales. Refuerza lo anterior que en el texto refundido del acuerdo de reorganización, en su punto II, número 3, relativo a la propuesta de pago, se indicó en su letra d) que: "la compañía se reservará US\$ 1.000.000.- (un millón de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) para la compra de maquinaria, siempre que fuere procedente, por no más de \$520.000.000", suma que es concordante con el precio de las compraventas (\$334.000.000 y \$186.000.000, respectivamente), lo que lleva a concluir, de forma inequívoca, que tales cantidades se encontraban reservadas precisamente para cumplir los contratos de promesa, con lo que no se entiende el desconocimiento que posteriormente se hace de la exigibilidad de las obligaciones.

Además, resulta pertinente considerar que el artículo 57 letra c) de la Ley N° 20.720, que se encuentra dentro del capítulo III relativo al procedimiento concursal de reorganización, señala respecto a la resolución de reorganización que: "Todos los contratos suscritos por el deudor mantendrán su vigencia y condiciones de pago. En consecuencia, no podrán terminarse anticipadamente en forma unilateral, exigirse anticipadamente su cumplimiento o hacerse efectivas las garantías contratadas, invocando como causal el inicio de un Procedimiento Concursal de Reorganización. El crédito del acreedor que contraviniera esta prohibición quedará pospuesto hasta que se pague a la totalidad de los acreedores a quienes les afectare el Acuerdo de Reorganización Judicial, incluidos los acreedores Personas Relacionadas del Deudor". Por consiguiente, la demandada, en su calidad de deudora, no puede esgrimir el hecho de haberse sometido a un proceso de reorganización como causal para dejar de observar sus deberes contractuales.

Respecto de las acciones revocatorias concursales seguidas ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, lo cierto es que aún se encuentran en etapa de tramitación, a la espera de que se dicte la sentencia definitiva (a contar del día 7 de febrero del año en curso). Asimismo, que la eventualidad de que se acojan o rechacen, resulta ser un hecho incierto e indistinto para la resolución de esta contienda. Por ende, no puede aceptarse que tengan el valor de producir el efecto buscado por la demandada, por no ser un motivo de exención para el cumplimiento de los contratos de promesa a los que libre y voluntariamente se sometió, conociendo el estado de sus negocios.



Foja: 1

Tampoco procede la alegación de litis pendencia como excepción de fondo, por ser dilatoria, sin que haya sido opuesta en tal carácter.

Por último y respecto del estado material de los bienes que son objeto de los contratos de promesa, no puede tenerse por acreditada la desvalorización alegada por la demandada. Ello, porque la prueba rendida en tal sentido consiste solo en una copia de un peritaje, que no fue ordenado en estos autos ni reconocido por quien aparece como su autor, motivo por el cual no se le otorgó valor, especialmente cuando dicho informante no pudo ser preguntado por las partes y el propio Tribunal. Además, debe considerarse que los bienes se encontraban en poder de la demandada desde la fecha de suscripción de las escrituras públicas, oportunidad en que manifestó conocer el estado en que se encontraban, bienes que recibió conforme. Por tanto, para desvirtuar lo señalado en tales instrumentos, era indispensable otra plena prueba y, por cierto, de mejor calidad, lo que no aconteció.

DECIMO TERCERO: Que los documentos no considerados especialmente en nada alteran la decisión que se hará, por ser innecesarios, debiendo estarse a las razones por las que se acogerá parcialmente la demanda.

DECIMO CUARTO: Que no se condenará en costas a la demandante, por no haber resultado totalmente vencida.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 44, 1437, 1489, 1545, 1546, 1547, 1551, 1552, 1554, 1698, 1699, 1700, 1702, 1706, 1712 y 1713 del Código Civil; y 144, 170, 342, 346, 358, 384 y 426 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I. Que se acogen las tachas deducidas en contra de los testigos Sofía Javiera Palazuelos Tomicic, Flavio Hernán Fuentes Olivares y María Cecilia Codoceo Medina, por la causal del artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil.

II. Que se acoge la demanda, solo en cuanto se ordena a la demanda Pampa Camarones SpA. dar cumplimiento a los dos contratos de promesa celebrados por escritura pública de fecha 30 de mayo de 2016, ya referidos en esta sentencia.

III. Que se rechaza la demanda en todo lo demás.

IV. Que no se condena en costas.



C-5426-2017

Foja: 1

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Rol C-5426-2017.

**Dictada por don Matías Franulic Gómez, Juez Titular del
Vigesimo Noveno Juzgado Civil de Santiago.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintisiete de Marzo de dos mil diecinueve**

